

GUÍA DE DERECHOS

para víctimas de
violencia de género
y violencias sexuales



MINISTERIO
DE IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE IGUALDAD
Y PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Existen versiones de esta guía traducidas a distintos idiomas.
Las encontrará escaneando el siguiente QR o si lo prefiere,
dirigiéndose al siguiente enlace:

<https://violenciagero.igualdad.gob.es/informacion-3/derechos/>





© Ministerio de Igualdad
Centro de Publicaciones
C/ Alcalá, 37 - 28071 Madrid

Elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Actualizado a agosto de 2024

NIPO en línea: 048-21-011-7

Correo electrónico: dgviolenciagenero@igualdad.gob.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: <https://cpage.mpr.gob.es>

ÍNDICE

BLOQUE 1: Derechos de las víctimas de violencia de género	7
1. Derechos específicos de las víctimas de violencia de género	8
1.1. ¿Quién es víctima de violencia de género?	8
1.2. ¿Cómo se acredita la situación de violencia de género?.....	8
1.3. Derecho a la información	9
1.3.1. Servicio de información y de asesoramiento jurídico.....	9
1.3.2. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género.....	10
1.4. Derecho a la asistencia social integral.....	10
1.5. Derecho a la atención sanitaria.....	12
1.6. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada	12
1.7. Derechos laborales	13
1.7.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena.....	13
1.7.2. Derechos de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes.....	14
1.8. Derechos en materia de Seguridad Social.....	15
1.8.1. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social	15
1.8.2. Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social	15
1.9. Derechos en materia de empleo para la inserción laboral	18
1.9.1. Programa específico de empleo	18
1.9.2. Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género.....	18
1.9.3. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género.....	18
1.10. Derechos de las funcionarias públicas	19
1.11. Derechos económicos	20
1.11.1. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo	20
1.11.2. Renta activa de inserción.....	20
1.11.3. Acceso al subsidio por desempleo por las personas víctimas de violencia de género	21
1.11.4. Anticipos por impago de pensiones alimenticias	22

1.11.5. Ingreso Mínimo Vital.....	22
1.11.6. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.....	23
1.12. Derecho a la reparación	24
1.13. Derecho a la escolarización inmediata.....	24
1.14. Becas y ayudas al estudio.....	25
1.15. Particularidades del empadronamiento por razones de seguridad.....	25
1.16. Derecho al cambio de apellidos o de identidad.....	26
2. Derechos específicos de las víctimas de violencia de género.....	26
2.1. Situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.....	26
2.1.1. Mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.....	26
2.1.2. Mujeres extranjeras no comunitarias: pueden ser titulares de alguno de los dos tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de género siguientes:.....	27
2.1.3. La autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de la que sea titular una mujer extranjera, se renovará a su expiración en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género	28
2.2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género.....	28
2.3. Derecho a la protección internacional	29
3. Derechos de las mujeres españolas víctimas de violencia de género fuera del territorio nacional.....	30
BLOQUE 2: Derechos de las víctimas de violencias sexuales.....	31
1. Derechos específicos de las víctimas de violencias sexuales	32
1.1. ¿Quién es víctima de violencias sexuales?.....	32
1.2. ¿Cómo se acreditan las violencias sexuales?.....	32
1.3. Derecho a la información	33
1.3.1. Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico.....	33

1.3.2. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencias sexuales	34
1.3.3. Centros de crisis.....	34
1.3.4. ATENPRO.....	34
1.4. Derecho a la práctica forense disponible, accesible y especializada	35
1.5. Derecho a la asistencia integral especializada y accesible.....	35
1.6. Derecho a la asistencia jurídica gratuita	36
1.7. Derechos laborales	37
1.7.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena.....	37
1.7.2. Derechos de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes.....	38
1.8. Derechos en materia de Seguridad Social.....	38
1.8.1. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social	38
1.8.2. Derechos de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes.....	39
1.9. Derechos en materia de empleo y para la inserción social	40
1.9.1. Programa específico de empleo	40
1.9.2. Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencias sexuales.....	41
1.10. Derechos de las funcionarias públicas	41
1.11. Derechos económicos	42
1.11.1. Ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales	42
1.11.2. Renta Activa de inserción.....	44
1.11.3. Acceso al subsidio por desempleo por las personas víctimas de violencias sexuales.....	44
1.11.4. Ingreso Mínimo Vital.....	45
1.11.5. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.....	45
1.12. Derecho a la reparación	46
1.13. Becas y ayudas al estudio.....	47
2. Derechos de las víctimas de violencias sexuales extranjeras.....	47
2.1. Protección de las víctimas de violencias sexuales extranjeras en situación irregular	47
2.2. Derecho a la protección internacional	48
3. Derechos de las víctimas de violencias sexuales españolas fuera del territorio nacional..	49

BLOQUE 3: Derechos de las víctimas del delito de los que también son titulares las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencias sexuales.....	51
1. Derechos del Estatuto de la víctima del delito	52
2. Derecho a formular denuncia.....	53
3. Derecho de las víctimas a la protección durante el proceso judicial.....	53
3.1. En el ámbito de la violencia de género	53
3.2. En el ámbito de las violencias sexuales.....	55
4. Derecho a solicitar una orden europea de protección.....	55
5. Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofrecimiento de acciones	55
6. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado	56
7. Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales	57
8. Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procesos relacionados con la violencia de género y violencias sexuales.....	57
9. Ayudas a las víctimas de delitos considerados violencia de género y violencias sexuales .	58
 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN.....	 61

BLOQUE 1

Derechos de las víctimas de violencia de género

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (B.O.E. núm. 313, de 29 de diciembre de 2004), consagra y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género una serie de derechos, con la finalidad de que estas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida.

Estos derechos son universales, en el sentido de que todas las mujeres que sufran o hayan sufrido algún acto de violencia de género tienen garantizados los mismos, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

1. Derechos específicos de las víctimas de violencia de género

1.1. ¿Quién es víctima de violencia de género?

Artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

A los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, es víctima de violencia de género **la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica**, incluidas **las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad**, ejercida sobre ella **por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad**, aun sin convivencia.

Esta forma de violencia contra las mujeres es una **violación de los derechos humanos** y una expresión de la discriminación, la situación de **desigualdad** y **las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres**.

Además, **sus hijos e hijas menores de edad y los/as menores de edad sujetos a su tutela, o guarda y custodia son víctimas de esta violencia** y la Ley Orgánica 1/2004 les reconoce toda una serie de derechos contemplados en los artículos 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 y en la Disposición Adicional 17ª.

La violencia de género también comprende (según la modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) **la violencia que, con el objetivo de causar daño o perjuicio a las mujeres, se ejerce sobre sus familiares o personas cercanas menores de edad** por parte de una persona que es o haya sido su cónyuge o que haya estado ligada a ella con una relación similar de afectividad, incluso sin convivencia.

1.2. ¿Cómo se acredita la situación de violencia de género?

Artículos 23, 26 y 27.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Con carácter general, la situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos correspondientes se acredita mediante **una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima**, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

La situación de violencia de género también podrá acreditarse mediante **informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida** destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

Para la acreditación de la situación de violencia de género a los efectos del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 3 de abril de 2019, se aprobó **un listado de servicios sociales, servicios especializados, o servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género** que tienen capacidad de acreditar la condición de víctima de violencia de género, así como un modelo común de acreditación para que las distintas

Administraciones autonómicas procedan, de manera homogénea, a la acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia de género. La Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 11 de noviembre de 2021, adoptó un Acuerdo por el que se aprueban los procedimientos básicos que permiten poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género y actualizó el modelo de Informe y los organismos que en cada Comunidad Autónoma emiten las acreditaciones de carácter administrativo. Esta acreditación permite el acceso de las víctimas de violencia de género a los derechos regulados en el Capítulo II “Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social” de la Ley Orgánica 1/2004 y también a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal que les resulte de aplicación, cuyas disposiciones normativas de carácter sectorial contemplen y regulen el acceso a cada uno de ellos, incluyendo, entre los requisitos exigidos, la acreditación de la situación de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.

En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

La información sobre esta acreditación está disponible en la página [web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género](#).

1.3. Derecho a la información

Artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

El derecho a recibir información está garantizado a través de los siguientes medios:

1.3.1. Servicio de información y de asesoramiento jurídico

- Servicio **gratuito y confidencial** que ofrece **información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul**, incluida, por tanto, la violencia de género en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
- El servicio es accesible a través de cuatro canales:
 - Por el número de teléfono corto: **016**.
 - Por correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es.
 - Por WhatsApp: número **600 000 016**, exclusivo para WhatsApp porque no admite llamadas de teléfono.
 - Por chat: a través de la web de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm>
- La información y la atención psicosocial inmediata están disponibles **las 24 horas** del día, **los 365 días** del año. El **asesoramiento jurídico** está disponible de **8 a 22 horas**, de lunes a domingo.
- **Accesible a las personas con discapacidad auditiva y/o del habla** por varios medios: a través del número de teléfono **900 116 016**; **Servicio Telesor** a través de la propia [página web de Telesor](#); en cuyo caso se necesita conexión a Internet; por medio de un teléfono móvil o una PDA con la instalación de una aplicación gratuita; a través del Servicio de videointerpretación [SVIsual](#); mediante Whatsapp: 600 000 016; o por Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es.

- **Accesible a las personas extranjeras** mediante la atención, además de en castellano y las lenguas cooficiales, en las siguientes lenguas:
 - Teléfono, durante 24 horas, 7 días, en 53 idiomas: castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano, inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, Afgano, Albanés, Armenio, Bambara, Bereber, Bosnio, Brasileiro, Cantonés, Checo, Coreano, Danés, Esloveno, Eslovaco, Farsi, Finés, Georgiano, Griego, Hindi, Holandés, Húngaro, Italiano, Japonés, Lituano, Mandinca, Noruego, Persa, Polaco, Poular, Serbocroata, Sirio, Soninké, Sueco, Tailandés, Taiwanés, Tamazight, Turco, Ucraniano, Urdu, Wolof.
 - Correo electrónico y whatsapp, durante 24 horas, 7 días: castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés, francés, alemán, portugués, chino, mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, italiano.
- Derivación de las llamadas en los siguientes supuestos:
 - Cuando se trate de llamadas referidas a situaciones de emergencia, se derivará al teléfono **112**.
 - Cuando se trate de llamadas de información general sobre cuestiones relativas a la igualdad de las mujeres, se derivará al **Instituto de las Mujeres**.
 - Cuando se trate de llamadas que requieran de información específica relacionada con **una Comunidad Autónoma**, se derivará al teléfono autonómico correspondiente.
 - Las llamadas realizadas por personas menores de edad serán derivadas al Teléfono **ANAR** de Ayuda a Niños y Adolescentes.

El servicio del 016 tiene categoría de servicio esencial, por lo que, en caso de que concurra cualquier situación que dificulte el acceso o la prestación de tales servicios, las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento y su adaptación.

1.3.2. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género

Está disponible en la [página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género](#).

Permite la localización sobre mapas activos de los distintos recursos (policiales, judiciales, información, atención, asesoramiento, etc.) que las Administraciones públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de violencia de género.

1.4. Derecho a la asistencia social integral

Artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Artículo 156 del Código Civil

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia social integral que incluye **servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral**, que han de responder a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La finalidad de estos servicios es dar cobertura a las necesidades derivadas de la situación de violencia y restaurar la situación en que se encontraba la víctima antes de padecerla o, al menos, paliar sus efectos.

A través de los mismos se hace posible que las mujeres:

- Reciban asesoramiento sobre las actuaciones que pueden emprender y sus derechos.
- Conozcan los servicios a los que pueden dirigirse para recabar asistencia material, médica, psicológica y social.
- Accedan a los diferentes recursos de alojamiento (emergencia, acogida temporal, centros tutelados, etc.) en los que está garantizada su seguridad y cubiertas sus necesidades básicas.
- Recuperen su salud física y/o psicológica.
- Logren su formación, inserción o reinserción laboral, y reciban apoyo psico-social a lo largo de todo el itinerario de recuperación integral con la finalidad de evitar la doble victimización.

Los servicios de acogida y asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencia contra las mujeres tendrán carácter de servicios esenciales. Por ello, ante alguna circunstancia que dificulte el acceso o la prestación de tales servicios, las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento y su adaptación.

El derecho a la asistencia social integral se reconoce también a los/as **menores de edad** que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. Los servicios sociales deben contar con un número suficiente de plazas previstas para los/as menores de edad, con personal con formación específica en su atención y profesionales de la psicología infantil, a fin de prevenir y evitar eficazmente las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los mismos.

Para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, cuando se haya dictado una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal; o cuando se haya iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad; o por atentar contra el otro progenitor; bastará el consentimiento de éste, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años, se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos.

La organización de los servicios para hacer efectivo este derecho corresponde a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y a las Corporaciones Locales.

A estos efectos, el Protocolo de derivación entre las Comunidades Autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas, adoptado en 2014, facilita la movilidad de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, entre centros de acogida de distintas Comunidades Autónomas, bien por razones de seguridad de la mujer o de los menores a su cargo, o bien para favorecer su recuperación social.

1.5. Derecho a la atención sanitaria

Artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, introducido por la Disposición Final Novena de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Las mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas, tienen **derecho a la atención sanitaria**, incluida la atención psicológica y psiquiátrica, **y al seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su total recuperación**, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas derivadas de la situación de violencia sufrida.

Los servicios sanitarios contarán con psicólogos infantiles para la atención de los hijos e hijas menores que sean víctimas de violencia vicaria.

Estos servicios se prestarán garantizando **la privacidad y la intimidad de las mujeres**, y el respeto, en todo caso, **a las decisiones que ellas tomen en su atención sanitaria**. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y asistencia en situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad, mujeres con problemas de salud mental, adicciones u otras problemáticas o casos de adicciones derivadas o añadidas a la violencia.

1.6. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada

Artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a **la asistencia jurídica gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar, que se les prestará de inmediato**, en aquellos procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, **la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querrela, o se inicie el procedimiento penal, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria**. El beneficio de justicia gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de violencia de género, deberá ser la misma persona profesional de la Abogacía la que asista a esta, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.

La persona profesional de la Abogacía designada para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación de la persona profesional de la Procura, en tanto la víctima no se haya personado como acusación. Hasta entonces, cumplirá la persona profesional de la Abogacía el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

Las víctimas de violencia de género **podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento**, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado.

Los respectivos Colegios de Abogados contarán con **un turno de guardia permanente especializado** para la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, entre otras, las siguientes prestaciones:

- **Asesoramiento y orientación gratuitos** previos al proceso y, en particular, en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia.
- **Defensa y representación gratuitas** por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos.
- **Inserción gratuita de anuncios o edictos**, en el curso del proceso, en periódicos oficiales.
- **Exención del pago de tasas judiciales**, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
- **Asistencia pericial gratuita** en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.
- **Obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios** de los documentos notariales.

1.7. Derechos laborales

Artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar **la conciliación del trabajo** con la situación de violencia de género, se garantiza **su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto** de trabajo, bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo, y se procura **su inserción laboral** en caso de que no estuviesen empleadas.

1.7.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena¹

Artículos 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 53.4 y 55.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

- **Derecho a la reducción de la jornada de trabajo** con disminución proporcional del salario o a **la reordenación del tiempo de trabajo**, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, para que la mujer haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

¹ Los Convenios Colectivos y los Acuerdos de empresa pueden contemplar mejoras de estos derechos

- **Derecho a la movilidad geográfica:** las mujeres que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. La empresa le reservará el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba durante los primeros 6 meses.
- **Derecho a la suspensión del contrato de trabajo** por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, con reserva del puesto de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad.
- **Derecho a la extinción del contrato de trabajo** por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
- **Derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo** si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas.
- **Las ausencias o faltas de puntualidad** al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda, se considerarán **justificadas**.
- **Nulidad de la decisión extintiva del contrato** en el supuesto de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.
- **Nulidad del despido disciplinario** en el supuesto de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

1.7.2. Derechos de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo

Art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

- Derecho a **la adaptación del horario de la actividad**.
- Derecho a **la extinción de la relación contractual**.
- Se considerará causa justificada **de interrupción de la actividad** por parte de la trabajadora la situación de violencia de género.
- A las trabajadoras, por cuenta propia, que sean víctimas de violencia de género y cesen su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en **situación de cese temporal**

de actividad, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

- **Reducciones en la cotización a la Seguridad Social** para víctimas de violencia de género que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

1.8. Derechos en materia de Seguridad Social

1.8.1. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social

Artículo 165.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

Disposición adicional única del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social

- El período de suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo previsto para las trabajadoras por cuenta ajena tendrá la consideración de **período de cotización efectiva**, a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

Artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Artículo 329 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- **Suspensión de la obligación de cotizar** a la Seguridad Social durante un período de seis meses para las trabajadoras por cuenta propia o autónomas que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social

- Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de las trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan reducido su jornada laboral con disminución proporcional del salario.

1.8.2. Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural

- A los efectos de las prestaciones por maternidad y por paternidad, se considerarán **situaciones asimiladas a la de alta** los periodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género.

Artículo 207 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Derecho a **la pensión de jubilación anticipada** por causa no imputable al trabajador de las mujeres que extingan su contrato de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia de género, y reúnan los requisitos exigidos.

Artículo 207 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Derecho a **la pensión de viudedad** en los supuestos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o extinción de la pareja de hecho de las mujeres víctimas de violencia de género que, aunque no sean acreedoras de la pensión compensatoria, acrediten los requisitos exigidos.

Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Artículo 231 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)

- **Impedimento para ser beneficiario de la pensión de viudedad a quien fuera condenado por sentencia firme** por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la víctima fuera su cónyuge o ex cónyuge, o pareja o ex pareja de hecho.
- Además, no se reconocerá el derecho al complemento económico al padre que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico

- **Impedimento para ser beneficiario del derecho al complemento** de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género al padre que haya sido condenado por violencia contra la mujer, en los términos que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre la madre, ni al padre que haya sido condenado por ejercer violencia contra los hijos o hijas.
- Además, no se reconocerá el derecho al complemento económico al padre que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.

Artículos 224 y 233 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer

- Derechos en materia de **orfandad**:

Pensión de orfandad: tienen derecho a ella los hijos e hijas de la mujer fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, en el momento de la muerte, sean menores de veintiún años o estén incapacitados para

el trabajo, o sean menores de veinticinco años y no efectúen un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional (SMI), también en cómputo anual, y que la mujer se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera.

Las hijas e hijos tendrán derecho al incremento previsto para los casos de orfandad absoluta, que alcanzará el 70 por ciento de la base reguladora cuando los rendimientos de la unidad familiar no superen el 75 por ciento del SMI vigente en cada momento.

Prestación de orfandad: tienen derecho a ella las hijas e hijos de la mujer fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad. Podrá ser beneficiario de la prestación de orfandad, siempre que en la fecha de la muerte fuera menor de veinticinco años, no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el SMI, también en cómputo anual.

La cuantía de la prestación de orfandad será el 70 por ciento de su base reguladora, siempre que los rendimientos de la unidad familiar no superen en cómputo anual el 75 por ciento del SMI vigente en cada momento.

El derecho a la pensión o prestación de orfandad no se suspenderá en el supuesto de adopción de los hijos e hijas de la causante fallecida como consecuencia de violencia sobre la mujer, siempre que los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas adoptadas, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Asimismo, cuando la muerte hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas de la causante, también se podrá reconocer el derecho a la pensión de orfandad, en su caso, la prestación de orfandad, cuando se cumplan los requisitos.

Artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)

- Para tener derecho a la prestación por desempleo, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la trabajadora por cuenta ajena se encuentra en situación legal de desempleo cuando extinga o suspenda su contrato de trabajo de manera voluntaria como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

Artículo 331 y 332 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Para tener derecho a la protección por cese de actividad, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la trabajadora autónoma se encuentra en situación legal de cese de actividad, cuando cese en el ejercicio de su actividad, de manera temporal o definitiva, por causa de la violencia de género.

Artículo 335 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Para tener derecho a la protección por cese de actividad, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que las socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado se encuentran en situación legal de cese de actividad, cuando cesen, con carácter definitivo o temporal, en la prestación de trabajo, por causa de la violencia de género.

1.9. Derechos en materia de empleo para la inserción laboral

1.9.1. Programa específico de empleo

Artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género

El programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, incluye las siguientes medidas:

- **Itinerario de inserción sociolaboral**, individualizado y realizado por personal especializado.
- **Programa formativo específico** para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta ajena.
- **Incentivos** para favorecer **el inicio de una nueva actividad** por cuenta propia.
- **Incentivos para las empresas** que contraten a víctimas de violencia de género.
- **Incentivos** para facilitar la **movilidad geográfica**.
- **Incentivos para compensar diferencias salariales**.
- **Convenios con empresas** para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica.

1.9.2. Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género

Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia de género, que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

1.9.3. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo

Disposición final primera del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre

Las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social, diferentes en función del carácter indefinido o temporal del contrato celebrado.

1.10. Derechos de las funcionarias públicas

Artículos 24 a 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Las funcionarias al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, Administraciones de las Entidades locales, organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, y Universidades Públicas, tienen los siguientes derechos:

- **Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria:** las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Las funcionarias víctimas de violencia, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán **derecho a la reducción de la jornada** con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración Pública competente en cada caso. La funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

- **Movilidad por razón de violencia de género:** las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos, la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

El procedimiento de movilidad está regulado en la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género de la Administración General del Estado, así como de los Organismos, Agencias y otras Entidades Públicas adscritas o dependientes de la misma.

Mediante la Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

- **Excedencia por razón de violencia de género:** las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Los derechos de otros tipos de personal están establecidos en su legislación específica propia, como es el caso, entre otros, del personal docente, del personal estatutario de los Servicios de Salud o del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

1.11. Derechos económicos

1.11.1 Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo

Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre. La normativa relativa al procedimiento de tramitación es la que al respecto haya aprobado la Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se solicite la ayuda

Es una **ayuda económica dirigida a las mujeres víctimas de violencia** de género que reúnan los siguientes requisitos:

- Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- Tener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se acredita mediante el informe emitido por el Servicio Público de Empleo correspondiente.

Esta ayuda económica se abona en un único pago, y su importe, calculado en función de un número de mensualidades del subsidio por desempleo correspondiente, depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo, y de si la propia mujer y/o los familiares a su cargo tienen reconocido un grado de discapacidad.

Esta ayuda es compatible con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.

En cambio, es incompatible con otras ayudas que cumplan la misma finalidad, así como con la participación en el programa de Renta Activa de Inserción.

Esta no tiene en ningún caso la consideración de renta o ingreso computable a efectos del percibo de las pensiones no contributivas.

1.11.2. Renta activa de inserción

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo

Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo

Es una **ayuda económica** que se reconoce a las **personas desempleadas** incluidas en el llamado “**programa de Renta Activa de Inserción**”, a través del cual se llevan a cabo actuaciones encaminadas a **incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo**.

Para ser incluida en el programa de Renta Activa de Inserción y ser beneficiaria de esta ayuda económica, la mujer víctima de violencia de género deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Acreditar su condición de víctima de violencia de género.
- Estar inscrita como demandante de empleo, pero no se le exige llevar 12 meses inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo.
- No convivir con su agresor.
- Ser menor de 65 años, pero no se le exige tener 45 o más años de edad.
- Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- Puede ser beneficiaria de un nuevo programa de Renta Activa de Inserción aunque hubiera sido beneficiaria de otro programa dentro de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud.

La cuantía de la Renta Activa de Inserción es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento.

Además, incluye una ayuda suplementaria de pago único si la mujer se ha visto obligada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en éste, de cuantía equivalente al importe de tres meses de la Renta Activa de Inserción.

Esta ayuda económica podrá solicitarse hasta el 1 de noviembre de 2024, momento en cual la normativa que la regula perderá su vigencia. No obstante, las víctimas de violencia contra las mujeres podrán solicitar la ayuda económica del siguiente apartado.

1.11.3. Acceso al subsidio por desempleo por las personas víctimas de violencia de género

Disposición adicional quincuagésima octava del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Las víctimas de violencia de género acreditadas podrán acceder a este subsidio por desempleo, introducido por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, y que sustituye a la Renta Activa de Inserción.

Para ello, deberán reunir una serie de requisitos, entre los que se encuentran:

no tener derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo

no haber sido beneficiarias de 3 derechos al programa de Renta Activa de Inserción (salvo que hubieran transcurrido más de tres años desde que se generó el primer derecho hasta que se solicitó este subsidio)

estar inscritas como demandantes de empleo o carecer de rentas propias (renta durante el mes natural anterior que no supere el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias)

La cuantía del subsidio será igual al 95% del IPREM durante los 180 primeros días; al 90% desde el día 181 hasta el 360; y del 80% a partir del día 361.

La duración máxima del subsidio será de 30 meses, salvo que la persona hubiera sido beneficiaria con anterioridad de uno o dos derechos al programa de Renta Activa de Inserción, en cuyo caso, la duración máxima será de 20 y 10 meses, respectivamente.

1.11.4. Anticipos por impago de pensiones alimenticias

Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

A través del **Fondo de Garantía del Pago de Alimentos** se garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

Las personas beneficiarias de los anticipos son, con carácter general, los hijos titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del IPREM, vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar.

Las personas beneficiarias tienen derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, con el límite de 100 euros mensuales, que se podrá percibir durante un plazo máximo de dieciocho meses.

En el supuesto en que la persona que ostente la guarda y custodia de los menores (que es quien solicita y percibe el anticipo) sea víctima violencia de género, se entiende que existe una situación de **urgente necesidad** para reconocer los anticipos del Fondo, por lo que se tramitará el procedimiento de urgencia, que implica que el plazo para resolver y notificar la solicitud será de dos meses.

1.11.5. Ingreso Mínimo Vital

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital

Las mujeres víctimas de violencia de género podrán ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, cuya finalidad es **prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social** de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas, cuando cumplan los requisitos exigidos, si bien:

- No se les exigirá el requisito de edad (con carácter general, el IMV es para personas de al menos 23 años), solo se exigirá que sean mayores de edad.
- No están obligadas a estar unidas por matrimonio o pareja de hecho.
- No se les exige el requisito de formar parte de otra unidad de convivencia. Además, se considerará una unidad de convivencia la constituida por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio habitual acompañada de sus hijos/as o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción.
- No se les exige haber iniciado los trámites de separación o divorcio.
- No se les exigirá tener residencia en España cuando acrediten la situación de violencia de género por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

1.11.6. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores

Artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025

Las mujeres víctimas de violencia de género constituyen un colectivo con **derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda**:

- Posibilidad de acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales, acordados en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria.
- Posibilidad de acceder al [Fondo Social de Viviendas](#).
- Tienen la consideración de beneficiarias de las ayudas previstas en el [Plan Estatal de Vivienda \(BOE\)](#):
 - **Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género**, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables:
 - Podrán ser beneficiarias las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, y víctimas de violencia sexual.
 - No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, víctima de trata con fines de explotación sexual, o víctima de violencia sexual.
 - Podrán ser beneficiarias las Administraciones públicas, sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las distintas Administraciones públicas, entidades de utilidad pública, empresas públicas y entidades benéficas, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, o víctimas de violencia sexual.
 - **Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico**: prevé condiciones más beneficiosas para las personas que sean hijos o hijas de víctimas de violencia de género.
 - **Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas para su alquiler como vivienda social**. Las viviendas cedidas por la SAREB o entidad pública de que se trate habrán de destinarse con carácter prioritario para satisfacer soluciones habitacionales a las víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual.

1.12. Derecho a la reparación

Artículo 28 bis y ter de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, introducido por la Disposición Final Novena de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Las víctimas de violencia de género tienen **derecho a la reparación**. Este derecho comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.

Las Administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá ser satisfecha por la o las personas civil o penalmente responsables, de acuerdo con la normativa vigente, y deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, al menos, los siguientes conceptos:

- el daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad
- la pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales
- los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante
- el daño social, entendido como el daño al proyecto de vida
- el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva

Del mismo modo, las Administraciones públicas garantizarán la completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas a través de la red de recursos de atención integral que se recogen en la presente Guía. Asimismo, las Administraciones públicas podrán establecer ayudas complementarias destinadas a las víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación. En particular, dichas víctimas podrán recibir ayudas adicionales para financiar los tratamientos sanitarios adecuados, incluyendo los tratamientos de reconstrucción genital femenina, si fueran necesarios.

Igualmente, con el objetivo de asegurar la recuperación simbólica, promoverán el restablecimiento de su dignidad y reputación, la superación de cualquier situación de estigmatización y el derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos. Las Administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, impulsarán las medidas necesarias para que las víctimas cuenten con protección efectiva ante represalias o amenazas y promoverán, a través de homenajes y de acciones de difusión pública, el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas.

1.13. Derecho a la escolarización inmediata

Artículo 5 y disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de los actos de violencia de género, tienen derecho a **su escolarización inmediata en su nuevo lugar de residencia**.

1.14. Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025

Se ofrece un tratamiento específico para las solicitantes de beca que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, desde el 30 de junio de 2023 al 30 de junio de 2025, sus hijos e hijas menores de veinticinco años y las personas menores sujetas a su tutela o guardia o custodia que soliciten dichas becas y ayudas al estudio, siempre que cumplan todas las demás condiciones previstas en la normativa vigente. Siendo estas, la beca básica, o beca de matrícula según corresponda, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a la residencia y la cuantía variable que resulte de la aplicación de la fórmula; sin que les sean de aplicación los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2023-2024 ni el límite del número de años con condición de beneficiario o beneficiaria de becas, ni tampoco la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2024-2025 para el que hayan resultado beneficiarias de la beca.

1.15 Particularidades del empadronamiento por razones de seguridad

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal

Las víctimas de violencia de género que residan o se encuentren bajo el amparo de la red de recursos de asistencia social integral, como pisos tutelados, casas de acogida u otros recursos de la citada red, y cuando no sea posible el empadronamiento en el domicilio real por razones de seguridad, el empadronamiento podrá llevarse a cabo en el lugar que determinen los Servicios Sociales del municipio en el que efectivamente residan tras la correspondiente valoración técnica. Este lugar podrá ser la sede de una institución social o de los Servicios Sociales de cualquier Administración Pública domiciliada en su término municipal, o cualquier otra dirección que estos indiquen, siempre dentro del citado municipio. Para ello, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- Que los Servicios Sociales y la institución social de referencia estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión.
- Que los responsables de estos Servicios Sociales informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio de las personas que se pretenden empadronar.
- Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal con referencia en el callejero municipal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública.

1.16. Derecho al cambio de apellidos o de identidad

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, modificada por la Ley 6/2021, de 28 de abril

Para las víctimas de violencia de género o de sus descendientes que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, el Encargado del Registro Civil podrá autorizar el cambio de apellidos sin necesidad de que estas cumplan con los requisitos previstos con carácter general, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente. Es decir, sin necesidad de que cumplan con los requisitos consistentes en que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por la persona interesada; o que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente a la persona peticionaria; o que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea

En estos casos, podrá autorizarse por razones de urgencia o seguridad el cambio total de identidad sin necesidad de cumplir con los requisitos generales previstos, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

2.1. Situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

Artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

La situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género incluye las siguientes posibilidades:

2.1.1. Mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Artículo 9.4 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Para conservar el derecho de residencia en el caso de nulidad matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, la mujer que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberá acreditar que ha sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista **una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal** en el que se indique la existencia de indicios de violencia

de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído **resolución judicial** de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.

2.1.2. Mujeres extranjeras no comunitarias: pueden ser titulares de alguno de los dos tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de género siguientes:

Artículo 19.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

Artículo 59.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

- Autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras **reagrupadas con su cónyuge o pareja**:
 - Se obtendrá la autorización una vez dictada a favor de la mujer una orden de protección o, en su defecto, cuando exista un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.
 - Duración de la autorización: 5 años.

Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

Artículos 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

- Autorización de residencia temporal y trabajo por **circunstancias excepcionales** de las mujeres extranjeras **en situación irregular**:
 - Se podrá solicitar la autorización desde el momento en que se haya dictado a favor de la mujer una orden de protección o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género.
 - Se concederá la autorización cuando el procedimiento penal concluya con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.
 - Duración de la autorización: 5 años. No obstante, en el curso de estos 5 años la mujer puede acceder a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, para lo que se computará el tiempo en el que hubiera sido titular de una autorización provisional de residencia temporal y trabajo.
 - También se podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades; o autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia. En estos casos, la solicitud deberá hacerla la mujer extranjera, por sí misma o a través de representante, en el momento en que solicite a su favor la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, o en cualquier otro momento posterior a lo largo del proceso penal. Su concesión y su duración se producirá en los mismos términos que la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular.

- o La autoridad administrativa competente para otorgar esta autorización por circunstancias excepcionales, **concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera** y, en su caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades o de residencia y trabajo si fueran mayores de dieciséis años, que se encuentren en España en el momento de la denuncia. Estas **autorizaciones provisionales concluirán en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales.**
- o Concedida la autorización provisional de residencia y trabajo, la mujer extranjera puede acceder a derechos como los siguientes:
 - La **Renta Activa de Inserción**, a la que tienen derecho las mujeres extranjeras que residan legalmente en España y reúnan el resto de requisitos exigidos.
 - El subsidio por desempleo, al que tienen derecho las mujeres extranjeras que residan legalmente en España y reúnan el resto de requisitos exigidos.
 - La **ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004**, a la que tienen derecho las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género titulares de una autorización de residencia y trabajo en España que reúnan el resto de requisitos exigidos.

2.1.3. La autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de la que sea titular una mujer extranjera, se renovará a su expiración en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género

Artículo 38.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

El artículo 38.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, contempla que la autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración, cuando concurren otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

2.2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género

Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

Artículos 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

- Si al denunciarse una situación de violencia de género, se pusiera de manifiesto **la situación irregular** de la mujer extranjera:

- o No se incoará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español.
- o Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.
- Concluido el procedimiento penal:
 - o Con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se concederá a la mujer extranjera **la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales** y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades.
 - o Con una sentencia no condenatoria o con una resolución de la que no pueda deducirse la situación de violencia de género, se denegará a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Además, perderá eficacia la autorización provisional de residencia y trabajo concedida a la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones provisionales concedidas a sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Y se incoará o continuará el procedimiento administrativo sancionador por estancia irregular en territorio español.

2.3. Derecho a la protección internacional

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

- **El derecho de asilo.** Se reconocerá el estatuto de refugiada a la mujer que, debido a un fundado temor de ser perseguida por motivos de género, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, así como a la mujer apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.

En este sentido, pueden ser motivos de persecución basados en el género la violencia ejercida por la pareja o expareja y otras formas de violencia sobre la mujer, tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia sexual o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, siempre que, en cualquier caso, concurren los demás requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho de asilo.

- o Para que se reconozca el derecho de asilo es preciso que el fundado temor de las mujeres a ser objeto de persecución se base en actos de persecución que sean graves y revistan la forma de actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual.
- o Para valorar los motivos de persecución se deberán valorar las circunstancias imperantes en el país de origen en relación con la situación del grupo social determinado, en este caso, las mujeres.

- **La protección subsidiaria.** Se otorgará protección subsidiaria a las mujeres extranjeras o apátridas que, sin reunir los requisitos exigidos para obtener asilo, padezcan un riesgo real de sufrir un daño grave en caso de retornar a su país de origen, o al de su anterior residencia en el caso de las apátridas. El daño grave que da lugar a protección subsidiaria consiste en alguno de los siguientes:
 - Pena de Muerte
 - Tortura o tratos inhumanos o degradantes
 - Amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles en situaciones de conflicto.

3. Derechos de las mujeres españolas víctimas de violencia de género fuera del territorio nacional

Las mujeres españolas que residen en el extranjero, cuando sufren violencia de género, pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad debido a las barreras lingüísticas y culturales, la falta de redes sociales o al desconocimiento de los recursos existentes en el país. Así, a la obligación de los poderes públicos en materia de información, asistencia y protección a las mujeres víctimas de violencia de género, se suma la obligación general de proteger a los ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior.

El Protocolo firmado el 8 de octubre de 2015 por los entonces Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, persigue el establecimiento de un marco común de colaboración para articular la realización de funciones en materia de violencia de género, previniendo y abordando las situaciones de violencia de género mediante la información sobre recursos disponibles en el país de residencia, y facilitando la protección y el retorno de las mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas cuando la situación lo requiera, dentro del marco normativo vigente. Las Embajadas y Consulados de España y las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social facilitarán a las mujeres españolas información para contactar con los recursos especializados para víctimas de violencia de género disponibles en el país en que residan, así como orientación sobre los recursos médicos, educativos y legales que las autoridades locales ponen a su alcance ante situaciones de violencia de género.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en caso de retorno de la mujer, llevará a cabo labores de coordinación con las Comunidades Autónomas a fin de garantizar a las mujeres los derechos que les reconoce la normativa española y de facilitar su integración social.

BLOQUE 2

Derechos de las víctimas de violencias sexuales

1. Derechos específicos de las víctimas de violencias sexuales

1.1. ¿Quién es víctima de violencias sexuales?

Artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Serán consideradas como víctimas, a los efectos de la Ley Orgánica 10/2022, **las mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa;** o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española.

Se entiende como violencias sexuales **cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital.** Se considera incluido en el ámbito de aplicación, a efectos estadísticos y de reparación, el feminicidio sexual, entendido como homicidio o asesinato de mujeres y niñas vinculado a conductas definidas en el siguiente párrafo como violencias sexuales. Se consideran violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

De este modo, se busca garantizar el derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales mediante la adopción de medidas que garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales, y la atención integral inmediata y recuperación en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales.

1.2. ¿Cómo se acreditan las violencias sexuales?

Artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Disposición final quinta de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Con carácter general, la situación de violencia sexual que da lugar al reconocimiento de los derechos correspondientes se acredita mediante una **sentencia condenatoria** por un delito contra la libertad sexual o cualquier otra **resolución judicial** que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el **informe del Ministerio Fiscal** que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia sexual.

También podrán acreditarse las situaciones de violencias sexuales mediante:

- informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, o de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora
- por sentencia recaída en el orden jurisdiccional social
- por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos

En el caso de **víctimas menores de edad**, y a los mismos efectos, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

1.3. Derecho a la información

Artículo 34 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Las víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir **plena información y asesoramiento** adecuado a su situación personal. Este derecho está garantizado a través de los siguientes servicios:

1.3.1. Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico

- Servicio **gratuito y confidencial** que ofrece **información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes**.
- El servicio es accesible a través de cuatro canales:
 - Por el número de teléfono corto: **016**.
 - Por correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es.
 - Por WhatsApp: número **600 000 016**, exclusivo para WhatsApp porque no admite llamadas de teléfono.
 - Por chat: a través de la web de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm>
- La información y la atención psicosocial inmediata están disponibles **las 24 horas** del día, **los 365 días** del año. El **asesoramiento jurídico** está disponible de **8 a 22 horas**, de lunes a domingo.
- **Accesible a las personas con discapacidad auditiva y/o del habla** por varios medios: a través del número de teléfono **900 116 016**; mediante el **Servicio Telesor** a través de la propia [página web de Telesor](#), en cuyo caso se necesita conexión a Internet; por medio de un teléfono móvil o una PDA con la instalación de una aplicación gratuita; mediante el Servicio de videointerpretación [SVlsual](#); a través de WhatsApp: 600 000 016; o mediante el Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es.
- **Accesible a las personas extranjeras** mediante la atención, además de en castellano y las lenguas cooficiales, en las siguientes lenguas:
 - Teléfono, durante 24 horas, 7 días, en 53 idiomas: castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano, inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, Afgano, Albanés, Armenio, Bambara, Bereber, Bosnio, Brasileiro, Cantonés, Checo, Coreano, Danés, Esloveno, Eslovaco, Farsi, Finés, Georgiano, Griego, Hindi, Holandés, Húngaro, Italiano, Japonés, Lituano, Mandinca, Noruego, Persa, Polaco, Poular, Serbocroata, Sirio, Soninké, Sueco, Tailandés, Taiwanés, Tamazight, Turco, Ucraniano, Urdu, Wolof.
 - Correo electrónico y WhatsApp, durante 24 horas, 7 días: castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés, francés, alemán, portugués, chino, mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, italiano.
- Derivación de las llamadas en los siguientes supuestos:
 - Cuando se trate de llamadas referidas a situaciones de emergencia, se derivará al teléfono **112**.
 - Cuando se trate de llamadas de información general sobre cuestiones relativas a la igualdad de las mujeres, se derivará al **Instituto de las Mujeres**.

- o Cuando se trate de llamadas que requieran de información específica relacionada con **una Comunidad Autónoma**, se derivará al teléfono autonómico correspondiente.
- o Las llamadas realizadas por personas menores de edad serán derivadas al Teléfono **ANAR** de Ayuda a Niños y Adolescentes.

El Servicio del 016 tiene categoría de servicio esencial, por lo que, en caso de que concurra cualquier situación que dificulte el acceso o la prestación de tales servicios, las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento y su adaptación.

1.3.2. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencias sexuales

Está disponible en la [página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género](#).

Permite la localización sobre mapas activos de los distintos recursos (policiales, judiciales, información, atención, asesoramiento, etc.) que las Administraciones públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de violencias sexuales.

1.3.3. Centros de crisis

Los Centros de Crisis son servicios dependientes de las Comunidades Autónomas que brindan atención psicológica, jurídica y social. Están destinados a proveer apoyo y asistencia en **situaciones de crisis** para víctimas, familiares y personas del entorno. Estos centros incluyen **el acompañamiento y la información** telefónica y presencial **las 24 horas todos los días del año**.

1.3.4. ATENPRO

El **Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (ATENPRO)**, es una modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas de violencia contra las mujeres una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.

El servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización. Permite que las mujeres **víctimas** de violencia contra las mujeres **puedan entrar en contacto en cualquier momento** con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante **situaciones de emergencia**, el personal del Centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.

Pueden solicitar el servicio las víctimas de la violencia contra las mujeres que cumplan los siguientes requisitos:

- No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.
- Participar en los programas de atención especializada para víctimas de la violencia contra las mujeres existentes en su territorio autonómico.

1.4. Derecho a la práctica forense disponible, accesible y especializada

Artículo 48 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se les practique sin demora el examen médico forense y las actuaciones de interés legal. Éstas se realizarán conjuntamente con el reconocimiento ginecológico o médico preceptivo para evitar la reiteración de exploraciones médicas.

Además, Las víctimas de violencias sexuales tienen derecho a la recogida de muestras biológicas y otras evidencias que puedan contribuir a la acreditación de la violencia sexual. Esta recogida de muestras y otras evidencias, que se realizará previo consentimiento informado, no está condicionada a la presentación de denuncia o al ejercicio de la acción penal.

Cuando las muestras biológicas y evidencias se recojan por el centro sanitario, se conservarán debidamente para su remisión, garantizando la cadena de custodia y del modo más inmediato posible, al Instituto de Medicina Legal.

1.5. Derecho a la asistencia integral especializada y accesible

Artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Todas las mujeres, niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y su situación administrativa; o en el extranjero siempre que sean de nacionalidad española, tienen derecho a la **asistencia integral especializada**. Esta asistencia estará orientada a ayudarles a superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales, o de otra índole, derivadas de las violencias sexuales.

A través de este derecho se hará posible que las víctimas de violencias sexuales:

- o Reciban **información y asesoramiento** sobre sus derechos y recursos de apoyo disponibles.
- o Conozcan los servicios a los que pueden dirigirse para recabar asistencia material, médica, psicológica y social.
- o Puedan acceder a **atención médica especializada** en los centros sanitarios, y psicológica, tanto inmediata como de emergencia y crisis, en los centros 24 horas, así como en los centros de acompañamiento y de recuperación integral en el largo plazo.
- o Reciban **asesoramiento jurídico** previo y asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia.
- o Recuperen su salud física y/o psicológica.
- o Logren su **formación, inserción o reinserción laboral**, y reciban apoyo psico-social a lo largo de todo el itinerario de recuperación integral con la finalidad de evitar la doble victimización.

El derecho a la asistencia integral especializada y accesible se garantizará mediante la disponibilidad de los siguientes servicios:

- o **Centros de crisis 24 horas:** se trata de servicios que brindan atención psicológica, jurídica y social. Están destinados a proveer apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas de su

entorno. Estos centros incluyen el acompañamiento y la información telefónica y presencial las 24 horas todos los días del año.

- **Servicios de recuperación integral:** consisten en servicios interdisciplinarios de recuperación psicológica y acompañamiento social, educativo, laboral y jurídico que trabajan para apoyar la recuperación y acompañamiento psicológica de las víctimas en el largo plazo y durante su proceso de recuperación.
- **Servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual:** estos servicios comprenden la asistencia psicológica, jurídica y asesoramiento social a las víctimas en su propio idioma.
- **Servicios de atención especializada a niñas y niños víctimas de violencias sexuales:** se trata de servicios adaptados y adecuados a sus necesidades, que proveen asistencia psicológica, educativa y jurídica, y que se constituyen como lugar de referencia para las víctimas, al que se desplaza el conjunto de profesionales intervinientes en los procesos asistenciales y judiciales.

1.6. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 33.1 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Las víctimas de violencias sexuales tienen derecho al **asesoramiento jurídico previo y asistencia jurídica gratuita** en los procesos derivados de la violencia sexual, en los términos previstos en la legislación de Asistencia Jurídica Gratuita.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, entre otras, las siguientes prestaciones:

- **Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso** y, en particular, en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia.
- **Defensa y representación gratuitas** por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos.
- **Inserción gratuita de anuncios o edictos**, en el curso del proceso, en periódicos oficiales.
- **Exención del pago de tasas judiciales**, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
- **Asistencia pericial gratuita** en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.
- **Obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios** de los documentos notariales.

1.7. Derechos laborales

Artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

El reconocimiento de derechos laborales a las víctimas de violencias sexuales tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren o han sufrido, abandonen el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia, se garantiza su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo, y se procura su inserción laboral en caso de que no estuviesen empleadas.

1.7.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena

Artículo 38 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Artículos 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.8, 49.1.m), 53.4, 55.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

- **Derecho a la reducción de la jornada de trabajo** con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, para que la mujer haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
- **Derecho a la movilidad geográfica:** las mujeres que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. La empresa le reservará el puesto de trabajo que desempeñaba anteriormente durante los primeros 6 meses.
- **Derecho a la suspensión del contrato de trabajo** por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia sexual, con reserva del puesto de trabajo. El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión.
- **Derecho a la extinción del contrato de trabajo** por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia sexual.
- **Derecho a realizar su trabajo** total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas.
- **Las ausencias o faltas de puntualidad** al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia sexual, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda, se considerarán **justificadas**.

- **Nulidad de la decisión extintiva del contrato** en el supuesto de las trabajadoras víctimas de violencias sexuales por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.
- **Nulidad del despido** disciplinario en el supuesto de las trabajadoras víctimas de violencias sexuales por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

1.7.2. Derechos de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes

Artículo 38 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

la Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo

A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencias sexuales que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral se les considerará en **situación de cese temporal de la actividad**, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se les **suspenderá la obligación de cotización** durante un período de seis meses que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, **su situación será considerada como asimilada al alta**.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar.

Cuentan con los siguientes derechos:

- Derecho a la adaptación del horario de la actividad.
- Derecho a la extinción de la relación contractual.
- Se considerará causa justificada de interrupción de la actividad por parte de la trabajadora la situación de violencia de género.

1.8. Derechos en materia de Seguridad Social

Artículo 38 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

1.8.1. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social

Artículo 165.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- El período de suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo previsto para las trabajadoras por cuenta ajena, tendrá la consideración de **período de cotización efectiva** a efectos de las correspondientes

prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Artículo 329 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- **Suspensión de la obligación de cotizar a la Seguridad Social** durante un período de seis meses para las trabajadoras por cuenta propia o autónomas que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral

Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social

- Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de las trabajadoras víctimas de violencias sexuales que hayan reducido su jornada laboral con disminución proporcional del salario.

1.8.2. Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social

Artículo 207 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Derecho a la **pensión de jubilación anticipada** por causa no imputable al trabajador de las víctimas de violencias que extingan su contrato de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia sexual, y reúnan los requisitos exigidos.

Artículo 224 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Derechos en materia de **orfandad**:

Pensión de orfandad: tienen derecho a ella los hijos e hijas de la mujer fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, en el momento de la muerte, sean menores de veintiún años o estén incapacitados para el trabajo, o sean menores de veinticinco años y no efectúen un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, y que la mujer se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera.

Las hijas e hijos tendrán derecho al incremento previsto para los casos de orfandad absoluta, que alcanzará el 70 por ciento de la base reguladora cuando los rendimientos de la unidad familiar no superen el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento.

Prestación de orfandad: tienen derecho a ella las hijas e hijos de la mujer fallecida, cuando se deba a la comisión de alguno de los supuestos de violencias sexuales, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad. Podrá ser beneficiario de la prestación de orfandad, siempre que en la fecha de la muerte fuera menor de veinticinco años, no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.

La cuantía de la prestación de orfandad será el 70 por ciento de su base reguladora, siempre que los rendimientos de la unidad familiar no superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento.

El derecho a la pensión o prestación de orfandad no se suspenderá en el supuesto de adopción de los hijos e hijas de la causante fallecida como consecuencia de violencia sobre la mujer, siempre que los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, incluidas las personas huérfanas adoptadas, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Asimismo, cuando la muerte hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas de la causante, también se podrá reconocer el derecho a la pensión de orfandad, en su caso, la prestación de orfandad, cuando se cumplan los requisitos.

Artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Para tener **derecho a la prestación por desempleo**, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la trabajadora por cuenta ajena se encuentra en situación legal de desempleo cuando extinga o suspenda su contrato de trabajo de manera voluntaria como consecuencia de ser víctima de violencia sexual.

Art. 38.5 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Artículos 330 y 331 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Para tener **derecho a la protección por cese de actividad**, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la trabajadora autónoma se encuentra en situación legal de cese de actividad, cuando cese en el ejercicio de su actividad, de manera temporal o definitiva, por causa de la violencia sexual

Artículo 335 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

- Para tener **derecho a la protección por cese de actividad**, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que las socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado se encuentran en situación legal de cese de actividad, cuando cesen, con carácter definitivo o temporal, en la prestación de trabajo, por causa de la violencia sexual.

1.9. Derechos en materia de empleo y para la inserción social

1.9.1. Programa específico de empleo

Artículo 39 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

- **Programa específico de empleo:** se trata de un programa específico al que tienen derecho a acceder las víctimas de violencias sexuales inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. El programa incluye lo siguiente:

- **Itinerario de inserción sociolaboral**, individualizado y realizado por personal especializado.
 - **Programa formativo específico** para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta ajena.
 - **Incentivos** para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
 - **Incentivos para las empresas** que contraten a víctimas de violencia sexual.
 - **Incentivos** para facilitar la movilidad geográfica.
 - **Incentivos** para compensar diferencias salariales.
 - **Convenios con empresas** para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia sexual y su movilidad geográfica.
- Las trabajadoras desempleadas que hayan sufrido violencias sexuales, así como las trabajadoras autónomas que hubiesen cesado su actividad por ser víctimas de violencias sexuales, tendrán derecho, en el momento de demandar un empleo, a participar en las ayudas de contenido económico que contempla el artículo 41 ([ver el apartado 1.11 Derechos Económicos](#)), así como a participar en programas específicos de inserción laboral.

1.9.2. Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencias sexuales

Artículo 38.3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

- Las empresas que formalicen **contratos de interinidad** (siempre que el contrato se celebre con una persona desempleada) para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia sexual que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo tendrán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
- Cuando se produzca la **reincorporación**, esta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad.

1.10. Derechos de las funcionarias públicas

Artículo 40 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Las funcionarias al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, Administraciones de las Entidades locales, organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, y Universidades Públicas, tienen los siguientes derechos:

- **Permiso por razón de violencia sexual sobre la mujer funcionaria:** las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencias sexuales, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
- Las funcionarias víctimas de violencias sexuales, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán **derecho a la reducción de la jornada** con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración Pública competente en cada caso. La funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
- **Movilidad por razón de violencia sexual:** las mujeres víctimas de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos, la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

- **Excedencia por razón de violencia sexual:** las funcionarias víctimas de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Los derechos de otros tipos de personal están establecidos en su legislación específica propia, como es el caso, entre otros, del personal docente, del personal estatutario de los Servicios de Salud o del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

1.11. Derechos económicos

Artículos 37 y 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

1.11.1. Ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales

Real Decreto 664/2024, de 9 de julio, por el que se regulan las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales, y por el que se modifica el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Se trata de unas ayudas económicas dirigidas a víctimas de violencias sexuales que constan de los siguientes requisitos:

- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

- o En el supuesto de víctimas de violencias sexuales dependientes económicamente de la unidad familiar, se concederá la ayuda cuando esta no obtenga rentas superiores (excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias) a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional o de tres veces el salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias en el caso de familias integradas por cuatro o más miembros, o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Otros aspectos importantes sobre las ayudas:

- o El importe de la ayuda podrá percibirse (a elección de la víctima) en un pago único o en seis mensualidades.
- o Dicha ayuda podrá prorrogarse por una sola vez, siempre que sigan sin superarse los umbrales económicos descritos en los apartados arriba mencionados.
- o Cuando la víctima de la violencia sexual tuviera reconocida oficialmente una **discapacidad en grado igual o superior al 33%**, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo, prorrogables por una sola vez, siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a la concesión inicial.
- o En el caso de que **la víctima tenga personas a cargo**, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente ley orgánica. Dicha ayuda será igualmente prorrogable por una sola vez, en los mismos términos que los anteriores, siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a la concesión inicial.

Acceso a la ayuda y compatibilidades:

- o El **acceso** a esta ayuda se llevará a cabo mediante **la acreditación como víctima de violencias sexuales** que recoge el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual ([ver apartado 1.2](#)).
- o Estas ayudas serán **compatibles** con la percepción de las **indemnizaciones acordadas por sentencia judicial**, o, alternativamente, con **cualquiera de las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual**. Igualmente, serán compatibles con las ayudas previstas en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de **Renta Activa de Inserción** para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; con el **subsidio por desempleo** conforme al Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo; con las ayudas establecidas en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el **Ingreso Mínimo Vital**, y con la percepción de las ayudas que establezcan las Comunidades Autónomas en este ámbito material.

1.11.2. Renta Activa de inserción

Artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo

La **Renta Activa de Inserción** es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas incluidas en el llamado “programa de Renta Activa de Inserción”, a través del cual se llevan a cabo actuaciones encaminadas a incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

Para ser incluida en el programa de Renta Activa de Inserción y ser beneficiaria de esta ayuda económica, la víctima de violencia sexual deberá cumplir los siguientes requisitos:

- o Acreditar su condición de víctima de violencia sexual.
- o Estar inscrita como demandante de empleo, pero no se le exige llevar 12 meses inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo.
- o No convivir con su agresor.
- o Ser menor de 65 años, pero no se le exige tener 45 ó más años de edad.
- o Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- o Puede ser beneficiaria de un nuevo programa de Renta Activa de Inserción, aunque hubiera sido beneficiaria de otro programa dentro de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud.

La cuantía de la Renta Activa de Inserción es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento.

Además, incluye una ayuda suplementaria de pago único si la mujer se ha visto obligada a cambiar de residencia debido a la violencia sexual, en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en éste, de cuantía equivalente al importe de tres meses de la Renta Activa de Inserción.

Esta ayuda económica podrá solicitarse hasta el 1 de noviembre de 2024, momento en cual la normativa que la regula perderá su vigencia. No obstante, las víctimas de violencia contra las mujeres podrán solicitar la ayuda económica del siguiente apartado.

1.11.3. Acceso al subsidio por desempleo por las personas víctimas de violencias sexuales

Disposición adicional quincuagésima octava del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo

Las víctimas de violencias sexuales acreditadas podrán acceder a este subsidio por desempleo, introducido por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, y que sustituye a la Renta Activa de Inserción.

Para ello, **deberán reunir una serie de requisitos**, entre los que se encuentran:

- no tener derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo
- no haber sido beneficiarias de 3 derechos al programa de Renta Activa de Inserción (salvo que hubieran transcurrido más de tres años desde que se generó el primer derecho hasta que se solicitó este subsidio)
- estar inscritas como demandantes de empleo o carecer de rentas propias (renta durante el mes natural anterior que no supere el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias)

La cuantía del subsidio será igual al 95% del IPREM durante los 180 primeros días; al 90% desde el día 181 hasta el 360; y del 80% a partir del día 361.

La duración máxima del subsidio será de 30 meses, salvo que la persona hubiera sido beneficiaria con anterioridad de uno o dos derechos al programa de Renta Activa de Inserción, en cuyo caso, la duración máxima será de 20 y 10 meses, respectivamente.

1.11.4. Ingreso Mínimo Vital

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo

Las mujeres **víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual** podrán ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, cuya finalidad es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas, cuando cumplan los requisitos exigidos, si bien:

- o No se les exigirá el requisito de edad (con carácter general, el IMV es para personas de al menos 23 años), solo se exigirá que sean mayores de edad.
- o No están obligadas a estar unidas por matrimonio o pareja de hecho.
- o No se les exige el requisito de formar parte de otra unidad de convivencia.
- o No se les exigirá el plazo de un año de residencia legal y efectiva en España de manera continuada e ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud cuando acrediten la situación de violencia sexual por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

1.11.5. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores

Artículo 42 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo

El artículo 42 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, contempla que las Administraciones públicas promoverán el acceso prioritario de las víctimas de violencias sexuales al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda.

En este sentido, las víctimas de violencias sexuales constituyen un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda y se encuentran incluidas dentro de los siguientes programas del [Plan Estatal de Vivienda \(BOE\)](#):

- **Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.**
 - Este programa incluye como beneficiarias a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, y víctimas de violencia sexual.
 - No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, víctima de trata con fines de explotación sexual, o víctima de violencia sexual.
 - Podrán ser beneficiarias las Administraciones públicas, sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las distintas Administraciones públicas, entidades de utilidad pública, empresas públicas y entidades benéficas, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, o víctimas de violencia sexual.
- **Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas para su alquiler como vivienda social.** Las viviendas cedidas por la SAREB o entidad pública de que se trate habrán de destinarse con carácter prioritario para satisfacer soluciones habitacionales a las víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual y víctimas de violencia sexual.

1.12. Derecho a la reparación

Artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de 2022, de garantía integral de la libertad sexual

Las víctimas de violencias sexuales tienen **derecho a la reparación**. Este derecho comprende la indemnización económica por daños y perjuicios materiales y morales, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, así como las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.

En lo relativo a la **indemnización económica por daños y perjuicios** materiales y morales que corresponda a las víctimas de violencias sexuales, de acuerdo con las leyes penales sobre la responsabilidad civil v

- La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales
- Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante

- o El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida.
- o El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva

La indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente **responsables**, de acuerdo con la normativa vigente.

En los casos de muerte de la víctima de alguna de las conductas previstas como [violencias sexuales](#), sus hijos e hijas, cualquiera de sea la naturaleza de su filiación, por naturaleza o por adopción, podrán percibir una **pensión**, o, en su caso, una **prestación de orfandad**, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

1.13. Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas

Se ofrece un tratamiento específico para las solicitantes de beca que acrediten la condición de víctimas de violencia sexual, desde el 30 de junio de 2023 al 30 de junio de 2025, sus hijos e hijas menores de veinticinco años y las personas menores sujetas a su tutela o guardia o custodia que soliciten dichas becas y ayudas al estudio, siempre que cumplan todas las demás condiciones previstas en la normativa vigente. Siendo estas, la beca básica, o beca de matrícula según corresponda, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a la residencia y la cuantía variable que resulte de la aplicación de la fórmula; sin que les sean de aplicación los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2023-2024 ni el límite del número de años con condición de beneficiario o beneficiaria de becas, ni tampoco la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2024-2025 para el que hayan resultado beneficiarias de la beca.

Las becas que traigan causa de la condición de víctimas de violencia sexual son compatibles con las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales reguladas en el Real Decreto 664/2024.

2. Derechos de las víctimas de violencias sexuales extranjeras

2.1. Protección de las víctimas de violencias sexuales extranjeras en situación irregular

Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

Artículo 3.1 y 36 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual es de aplicación a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de [violencias sexuales](#) en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación

administrativa. A su vez, se establece que las víctimas de violencias sexuales que se encuentren en situación administrativa irregular, **gozarán de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica en igualdad de condiciones** que el resto de las víctimas.

En consecuencia:

- o Si al denunciarse una situación de violencia de sexual, se pusiera de manifiesto la situación irregular de la mujer extranjera:
 - **No se incoará el procedimiento administrativo sancionador** por encontrarse irregularmente en territorio español.
 - **Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador** que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.
- o Concluido el procedimiento penal:
 - **Con una sentencia condenatoria** o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia sexual, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, **se concederá a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales** y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades.
 - Con una sentencia no condenatoria o con una resolución de la que no pueda deducirse la situación de violencia sexual, se denegará a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Además, perderá eficacia la autorización provisional de residencia y trabajo concedida a la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones provisionales concedidas a sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Y se incoará o continuará el procedimiento administrativo sancionador por estancia irregular en territorio español.
 - Si del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia sexual, se incoará el expediente administrativo sancionador por estancia irregular en territorio español o se continuará, en el supuesto de que se hubiera suspendido inicialmente.

2.2. Derecho a la protección internacional

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

- **El derecho de asilo.** Se reconocerá la condición de refugiado a toda mujer, niña, niño y adolescente que, debido a un fundado temor de ser perseguida por **motivos** de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a

determinado grupo social, **de género**, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, así como a la mujer, niña, niño y adolescente apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.

En este sentido, pueden ser motivos de persecución basados en el género múltiples formas de violencia sobre la mujer, tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia sexual o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, siempre que, en cualquier caso, concurren los demás requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho de asilo.

- o Para que se reconozca el derecho de asilo es preciso que el fundado temor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a ser objeto de persecución se base en actos de persecución que sean graves y revistan la forma de actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual.
- o Para valorar los motivos de persecución se deberán valorar las circunstancias imperantes en el país de origen en relación con la situación del grupo social determinado.
- **La protección subsidiaria.** Se otorgará protección subsidiaria a las mujeres, niñas, niños y adolescentes extranjeras o apátridas que, sin reunir los requisitos exigidos para obtener asilo, padezcan un riesgo real de sufrir un daño grave en caso de retornar a su país de origen, o al de su anterior residencia en el caso de las apátridas. El daño grave que da lugar a protección subsidiaria consiste en alguno de los siguientes:
 - o Pena de muerte
 - o Tortura o tratos inhumanos o degradantes
 - o Amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles en situaciones de conflicto

3. Derechos de las víctimas de violencias sexuales españolas fuera del territorio nacional

Las víctimas de violencias sexuales españolas que residen en el extranjero a menudo se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad debido a las barreras lingüísticas y culturales, la falta de apoyos sociales o al desconocimiento de los recursos existentes en el país. Por ese motivo, la Ley prevé que las Embajadas y Oficinas Consulares de España en el exterior, dentro de sus deberes generales de protección a los españoles y españolas en el exterior, asistan a las víctimas de violencia sexual, proporcionándoles orientación y acompañamiento de manera prioritaria dentro de sus capacidades.

El Protocolo firmado el 8 de octubre de 2015 por los entonces Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que persigue el establecimiento de un marco común de colaboración para la realización de funciones en esta materia, ampara también a las víctimas de violencias sexuales, previniendo y abordando las situaciones de violencia sexual mediante la información sobre recursos disponibles en el país de residencia, y facilitando la protección y el retorno de las víctimas y, en su caso, de sus hijos e hijas cuando la situación lo requiera, dentro del marco normativo vigente.

Las Embajadas y Consulados de España y las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social facilitarán a las víctimas españolas información para contactar con los recursos especializados para víctimas de violencia sexual disponibles en el país en que residan, así como orientación sobre los recursos médicos, educativos y legales que las autoridades locales ponen a su alcance ante situaciones de violencia sexual. Asimismo, las Embajadas y Oficinas Consulares, en coordinación con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, facilitarán, en su caso, la repatriación de las víctimas a España.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en caso de retorno de la víctima, llevará a cabo labores de coordinación con las Comunidades Autónomas a fin de garantizar a las víctimas los derechos que les reconoce la normativa española y de facilitar su integración social.

BLOQUE 3

Derechos de las víctimas del delito de los que también son titulares las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencias sexuales

Además de los derechos específicos que la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, y los derechos que la Ley Orgánica 10/2022 reconoce a las víctimas de violencias sexuales, las mismas son beneficiarias de los derechos que las leyes reconocen a las víctimas del delito, entre los que cabe destacar los siguientes:

1. Derechos del Estatuto de la víctima del delito

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

Las víctimas de violencia de género y víctimas de violencias sexuales pueden acceder al catálogo general de derechos, procesales y extraprocesales, recogidos en el **Estatuto de la víctima del delito**. En caso de muerte o desaparición de la víctima directa de la violencia de género o sexual, los hijos e hijas de la víctima, el cónyuge no separado legalmente o de hecho, la persona que hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y los hijos e hijas de estos últimos que convivieran con la víctima serán consideradas víctimas indirectas. La persona responsable de los hechos delictivos no tendrá la consideración de víctima.

Algunos de estos derechos son:

- **Derecho a la información** desde el primer contacto con las autoridades competentes, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia.
- **Derecho**, en el momento de presentar la denuncia, **a obtener una copia de la denuncia**, debidamente certificada y, en su caso, a la traducción escrita de la copia de ésta.
- La **notificación de determinadas resoluciones** sin necesidad de que lo soliciten, de manera que estén informadas de la situación penitenciaria del investigado, encausado o condenado: las resoluciones por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal, las que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo; las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima.
- **Derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, a los servicios de asistencia y apoyo** facilitados por las Administraciones públicas, así como a los que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Estas Oficinas realizarán las siguientes funciones, entre otras:
 - El **apoyo emocional** a las víctimas y la asistencia terapéutica de las víctimas que lo precisen, garantizando la asistencia psicológica adecuada para la superación de las consecuencias traumáticas del delito.
 - **Evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima** y la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimización primaria, reiterada y secundaria, la intimidación y las represalias.
 - La elaboración de un **plan de apoyo psicológico** para las víctimas vulnerables y en los casos en que se aplica la orden de protección.
 - La **información sobre los servicios especializados disponibles** que puedan prestar asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto.
 - El **acompañamiento** de la víctima a lo largo del proceso.
- Recibir la **comunicación de las resoluciones** a las que se refiere el artículo 7.1 del Estatuto de la víctima del delito (la sentencia o las resoluciones que adopten medidas cautelares, entre otras) y realizar las actuaciones de información y asistencia que en su caso resulten precisas.

- **Derecho a ejercer la acción penal y la acción civil** conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pueden participar en la ejecución, a través de la interposición de recurso contra determinadas resoluciones judiciales, aunque no hayan sido parte en la causa:
 - El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria **autoriza la posible clasificación del penado en tercer grado** antes de que se extinga la mitad de la condena.
 - El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde que los beneficios penitenciarios, **los permisos de salida, la clasificación en tercer grado** y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas.
 - El auto por el que se conceda al penado **la libertad condicional**.

2. Derecho a formular denuncia

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

Las víctimas tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia de género y violencias sexuales sufridas.

A través de la denuncia se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de un delito.

Tras la presentación de la denuncia y su remisión a la autoridad judicial, si ésta entiende que existen indicios de haberse cometido un hecho delictivo, iniciará las correspondientes actuaciones penales.

3. Derecho de las víctimas a la protección durante el proceso judicial

3.1. En el ámbito de la violencia de género

La orden de protección es una resolución judicial que dicta el órgano judicial competente en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito de **violencia de género**, aprecia la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiere la adopción de medidas de protección durante la tramitación del proceso penal.

La orden de protección contempla en una única resolución medidas cautelares de naturaleza penal y civil a favor de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas; y activa al mismo tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima por las distintas Administraciones Públicas. Con la orden de protección se acredita la situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos que establece la Ley Orgánica 1/2004.

Las **medidas cautelares de naturaleza penal** que puede adoptar la autoridad judicial pueden ser una o algunas de las siguientes:

- **Desalojo del agresor del domicilio familiar.**

- **Prohibición de residir en determinada población.**
- **Prohibición de que** el agresor se aproxime a la víctima a la distancia que se determine.
- Prohibición de que el agresor se comunique con la víctima y/o con sus familiares u otras personas por cualquier medio: carta, teléfono, etc.
- Prohibición al agresor de acercarse a determinados lugares: centro de trabajo de la víctima, centros escolares de los hijos, etc.
- Omisión de datos relativos al domicilio de la víctima.
- Protección judicial de la víctima en las oficinas judiciales.
- Incautación de armas y prohibición de tenencia.

Las **medidas de naturaleza civil** pueden ser las siguientes:

- Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar.
- Determinación del régimen de guarda y custodia de los hijos menores.
- Determinación del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores.
- Fijación de una prestación de alimentos.
- Cualquier otra medida que sea necesaria para apartar a los menores de un peligro o evitarles perjuicios.

La solicitud puede efectuarla la propia víctima, sus familiares más cercanos, su abogado/a, o el Ministerio Fiscal. Sin perjuicio del deber de denuncia, los servicios sociales que conozcan su situación, deberán ponerlos en conocimiento del órgano judicial o del Ministerio Fiscal para que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección. Cuando existan menores, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas civiles.

Es aconsejable solicitar la orden de protección en el mismo momento en el que se presenta la denuncia, aunque también puede solicitarse con posterioridad.

Cuando no se presenta denuncia, la propia solicitud de la orden de protección tiene esta consideración, en cuanto a los hechos y situaciones de violencia relatados en la misma.

El Juzgado debe dictar la orden de protección en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación, tras una comparecencia de la víctima y el agresor. La Ley establece que esta comparecencia deberá realizarse por separado, evitando así la confrontación entre ambos.

El artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, en el caso de acordarse alguna de las medidas de protección de la víctima previstas en este precepto, podrá acordarse mediante resolución motivada la utilización de dispositivos telemáticos para el control de su cumplimiento.

3.2. En el ámbito de las violencias sexuales

En el marco de un proceso penal iniciado por la comisión de cualquiera de los delitos contra la libertad sexual previstos en el Código Penal, el órgano judicial podrá adoptar cualquiera de las medidas cautelares de carácter penal recogidas en la legislación procesal criminal, como la prisión provisional o la prohibición de acercamiento y/o comunicación con la víctima, con el fin de asegurar tanto el desarrollo del proceso penal como la efectividad del pronunciamiento judicial que finalmente se adopte.

Asimismo, también podrán adoptarse medidas cautelares de naturaleza civil cuando el órgano judicial así lo decida, que deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil.

El artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, en el caso de que se investigue alguno de los delitos mencionados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual², de acordarse alguna de las medidas de protección de la víctima previstas en este precepto, podrá acordarse mediante resolución motivada la utilización de dispositivos telemáticos para el control de su cumplimiento.

4. Derecho a solicitar una orden europea de protección

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

La víctima de violencia de género o violencia sexual que vaya a trasladarse a otro Estado miembro de la Unión Europea para residir o permanecer en él, y sea beneficiaria de una medida de protección adoptada, como medida cautelar o como pena privativa de derechos, en una orden de protección, auto de medidas cautelares o sentencia, puede solicitar la adopción de la orden europea de protección ante el órgano judicial competente.

La orden europea de protección emitida por el órgano judicial se documentará en un certificado, que se transmitirá a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecución.

5. Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofrecimiento de acciones

Artículos 109 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

² En artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, recoge: “En todo caso se consideran violencias sexuales los delitos previstos en el Título VIII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la infantil en todo caso, y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos”.

En el acto en el que el Juez reciba la declaración de la víctima, el Letrado de la Administración de Justicia le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible.

El ejercicio de este derecho, que supone **la intervención activa de la víctima de violencia de género o violencia sexual en el proceso judicial que se tramita tras su denuncia y el ejercicio de la acción penal** y, en su caso, de la acción civil, se realiza mediante la personación de la víctima en las actuaciones penales como acusación particular. Para ello, la víctima debe nombrar a un/a abogado/a en defensa de sus intereses y a un procurador para su representación.

Además, las víctimas que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito.

La designación de abogado y procurador puede realizarse por libre elección de la víctima o a través del Turno de Oficio. En este sentido, la Ley contempla **el derecho de las víctimas de violencia de género y de violencia sexual a ser beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia**, sin perjuicio de su derecho por razón de su situación socioeconómica a través del régimen general.

La personación y consiguiente condición de “parte” en el proceso penal conlleva que la víctima, a través de su abogado, puede proponer diligencias de prueba, intervenir en la práctica de las mismas, y conocer todas las resoluciones que se dicten durante la tramitación del proceso, pudiendo, si no está de acuerdo, presentar los recursos que procedan.

Asimismo, como acusación particular, la víctima podrá solicitar la condena del agresor y una indemnización por las lesiones, daños y perjuicios sufridos.

Independientemente de que la víctima se persone o no como acusación particular en el proceso penal derivado de su denuncia, el Ministerio Fiscal tiene encomendada la defensa de los intereses de las víctimas y perjudicados en los procesos penales. Si llega a la convicción de que se ha cometido un delito, dirigirá la acusación contra quien considere responsable. Si no llega a dicha convicción, no formulará la acusación o podrá solicitar el archivo del procedimiento, por ejemplo, si considera que no existen suficientes pruebas de los hechos.

6. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado

Artículos 100 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La comisión de un delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados. Esta responsabilidad civil comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

En caso de que la víctima haya ejercido la acción civil (para exigir la responsabilidad civil) en el proceso penal, en la sentencia que se dicte, y siempre que la misma sea condenatoria, además de la pena que en su caso se imponga al culpable, se fijará cuál es la responsabilidad civil por los daños físicos, psicológicos o morales causados a la víctima por el delito.

No obstante, la víctima puede reservarse su derecho a ejercer la acción civil en un proceso distinto ante los Juzgados del Orden Civil, de forma que en el proceso penal no se ejercitará la acción civil. También puede renunciar a cualquier reclamación que, en este sentido, le pudiera corresponder.

7. Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales

La víctima, aunque no ejerza su derecho a intervenir en el proceso penal, debe ser informada de su papel en el mismo y del alcance, desarrollo y la marcha del proceso. La información a la víctima de sus derechos corresponde tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Juzgado y a las Oficinas de Asistencia a la Víctima.

El contenido de dicha información comprenderá:

- o Su derecho a mostrarse parte en el proceso penal y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho delictivo.
- o La posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente pueden corresponderle. Información sobre el estado de las actuaciones judiciales, a examinar las mismas, así como a que se le expidan copias y testimonios (Artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
- o Debe serle comunicada cualquier resolución que pueda afectar a su seguridad, la adopción o modificación de otras medidas cautelares, los autos que acuerdan la prisión o libertad provisional del imputado y la situación penitenciaria del agresor (Artículos 109, 506.3, 544 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
- o Tiene que ser informada del lugar y fecha de celebración del juicio oral (Artículos 785.3, 962 y 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
- o Debe notificársele la sentencia, tanto de instancia como, en su caso, la que resuelva el recurso de apelación. (Artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículos 789.4, 973.2 y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Asimismo, debe notificársele el sobreseimiento del proceso (Artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

8. Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procesos relacionados con la violencia de género y violencias sexuales

Artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Artículo 50 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual

Artículo 232.2 de la Ley Orgánica Poder Judicial

Artículos 19 y siguientes de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; artículo 15.5 de la Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual

Artículos 2.a) y 3.1 de la Ley Orgánica 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales

Con respecto a las **víctimas de violencia de género**, la Ley Orgánica 1/2004 prevé medidas específicas de protección de la dignidad e intimidad de la víctima. Por un lado, se establece que los datos personales de la misma, de sus descendientes y

las personas que estén bajo su guarda o custodia, tengan carácter reservado. La reserva del nuevo domicilio, centro de trabajo o colegios de los hijos no sólo preservan la intimidad de la víctima, sino que, además, es un instrumento importante para su seguridad, al evitar que estos datos puedan llegar a conocimiento del imputado. Con esta misma finalidad, el modelo de solicitud de la orden de protección dispone que la víctima puede indicar un domicilio o teléfono de una tercera persona a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los órganos judiciales podrán hacer llegar las comunicaciones o notificaciones.

En relación con las **víctimas de violencias sexuales**, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, recoge una serie de medidas específicas de protección de la dignidad e intimidad de las víctimas. Así, establece que, en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia sexual se protegerá la intimidad de las víctimas, y en especial sus datos personales.

La Agencia Española de Protección de Datos, en el marco de sus competencias, garantizará una protección específica de los datos personales de las víctimas en los casos de violencia sexual, especialmente cuando esta se perpetúe a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, la Agencia garantizará la disponibilidad de una canal accesible y seguro de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos en Internet, que comporten un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales ([Enlace al canal de denuncia](#)).

Por otra parte, tanto en el ámbito de la violencia de género como en el ámbito de la violencia sexual, la Ley del **Estatuto de la víctima del delito** reconoce el derecho de las víctimas a la protección de su intimidad en **el marco del proceso penal**, y en este sentido, obliga a jueces, fiscales, funcionarios encargados de la investigación y cualquier persona que de cualquier modo intervenga o participe en el proceso, a adoptar las medidas necesarias para proteger la intimidad de las víctimas y de sus familiares, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. En particular, respecto de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, deberán adoptar las medidas para impedir la difusión de cualquier tipo de información que pueda facilitar su identificación.

A este respecto, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima, la adopción de cualquiera de las medidas siguientes cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia:

- **Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima**, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.
- **Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes** de la víctima o de sus familiares.

Asimismo, el Juzgado puede acordar, de oficio o a instancia de la propia víctima o del Ministerio Fiscal, que las actuaciones judiciales no sean públicas y que las vistas se celebren a puerta cerrada.

9. Ayudas a las víctimas de delitos considerados violencia de género y violencias sexuales

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo

Se trata de **ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas** de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental; así

como en beneficio de las víctimas de violencias sexuales en el sentido de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, incluidas las víctimas de homicidio subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.

Respecto a los/as **beneficiarios/as** que contempla la ley para estas ayudas, podrán acceder a las ayudas las mujeres nacionales de cualquier otro Estado que se hallen en España, cualquiera que sea su situación administrativa, cuando la afectada sea víctima de violencias sexuales en el sentido de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, incluidas las víctimas de homicidio subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, o víctima de violencia de género en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género.

La **condición de víctima** de violencia de género o violencia sexual **deberá acreditarse** por cualquiera de los siguientes medios de prueba:

- A través de la sentencia condenatoria.
- A través de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar de protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado.
- De la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre o en el artículo 36 de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

En el caso de **fallecimiento** como consecuencia de la violencia sufrida, los requisitos de acreditación serán exigible respecto de las personas beneficiarias a título de víctimas indirectas, con independencia de la nacionalidad o residencia habitual de la víctima fallecida.

Serán consideradas a **título de víctimas directas**, y, por tanto, podrán acceder a estas ayudas, las personas que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del delito, incluidas las víctimas de la violencia vicaria, prevista en el artículo 1.4. de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuando su familiar o allegado menor de edad fallezca como consecuencia del delito.

Son beneficiarias a **título de víctimas indirectas**, en el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de ésta, las personas que reúnan las condiciones que se indican a continuación:

- El cónyuge de la persona fallecida, si no estuviera separado legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con la persona fallecida de forma permanente con análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
- Los hijos de la persona fallecida, que dependieran económicamente de esta, con independencia de su filiación o de su condición de póstumos. Se presumirá económicamente dependientes del fallecido a los hijos menores de edad y mayores incapacitados.
- Los hijos que, no siéndolo de la persona fallecida, lo fueran de las personas contempladas en el párrafo a) anterior, siempre que dependieran económicamente de la persona fallecida.
- En defecto de las personas contempladas por los párrafos a), b) y c) anteriores, serán beneficiarios los padres de la persona fallecida si dependieran económicamente de ella.
- Los padres del menor de edad que fallezca a consecuencia directa del delito.

El **plazo** para solicitar estas ayudas es de cinco años, comenzando a contarse en todo caso desde que recaiga resolución judicial firme o desde el momento en que se acredite su condición de víctima.

El **importe** de las ayudas no podrá superar en ningún caso la indemnización fijada en la sentencia y se calcula mediante la aplicación de unos criterios en función del tipo de ayuda.

- En el supuesto de que la afectada sea **víctima de violencias sexuales o víctima de violencia de género**, el importe de la ayuda, calculado de acuerdo con los criterios generales establecidos en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, se incrementará en un veinticinco por ciento.
- En los **casos de muerte consecuencia de violencias sexuales o de la violencia de género**, la ayuda será incrementada en un veinticinco por ciento para beneficiarios hijos menores de edad o mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo.

Pueden concederse **ayudas provisionales** con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios. En los supuestos en que la víctima del delito tenga la consideración de víctima de violencias sexuales o de violencia de género, podrán concederse las ayudas provisionales cualquiera que sea la situación económica de la víctima o de sus beneficiarios.

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

Ámbito estatal	016 Personas con discapacidad auditiva: 900 116 016
Andalucía	900 200 999
Aragón	900 504 405
Canarias	112
Cantabria	942 214 141
Castilla-La Mancha	900 100 114
Castilla y León	012
Cataluña	900 900 120
Extremadura	
Galicia	900 400 273
Illes Balears	971 178 989
La Rioja	900 711 010
Madrid	012
Navarra	
País Vasco	900 840 111
Principado de Asturias	985 962 010
Región de Murcia	112
Comunidad Valenciana	900 580 888
Ceuta	900 700 099
Melilla	

Más información: en los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, en los Centros de Atención a la Mujer autonómicos y locales, en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las diferentes organizaciones de mujeres y de extranjeros.

Página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género:

<https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/home.htm>

Esta guía tiene un carácter orientativo y carece de validez legal.

En ningún caso sustituye a una asistencia jurídica especializada.